JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL
IPIALES – NARIÑO.
Carrera 4 No. 18 – 45 – Palacio de Justicia
j02cmpalipiales@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ipiales (N), catorce (14) de enero de dos mil veintidós (2022).

Proceso:	Acción de Tutela.
Radicación No:	2021-00552
Accionante:	FABIAN RICARDO VILLACIS RECALDE gervil7@yahoo.es 3185169831
Accionado:	SERVISUR S.A.S secretaria@servisursas.com

Procede el Juzgado a resolver la acción de tutela presentada por Fabián Ricardo Villacis Recalde, en contra de SERVISUR S.A.S, por considerar que se le ha vulnerado su derecho fundamental de petición.

ANTECEDENTES

1.- Hechos

Manifiesta el accionante, que el día 15 de noviembre de 2021 presentó derecho de petición ante la entidad accionada, solicitándole adelantar los trámites necesarios para que se distribuyan las acciones heredadas del causante Gerardo Alonso Villacís Coral, en favor de sus 7 hijos legalmente reconocidos.

Informa que el 3 de diciembre de 2021, SERVISUR S.A.S remitió contestación a su derecho de petición. Sin embargo, considera que la respuesta emitida no es suficiente y no satisface los requerimientos hechos por él, ya que se le aclaró que SERVISUR SAS no tiene funciones jurisdiccionales para decidir el tema planteado por el peticionario.

Finalmente, el accionante pone de presente que es una persona en condición de discapacidad visual (baja visión).

2.- La Petición

La petición en concreto va encaminada a solicitar a SERVISUR S.A.S adelante los trámites para que se redistribuyan las acciones heredadas del causante Gerardo Alonso Villacís Coral, en favor de sus 7 hijos legalmente reconocidos: Lucía y Martha Villacís Melo, Germán Eduardo Villacís Oviedo, Diego Germán Villacís Mafla, Fabián Ricardo Villacís Recalde, Raquel Villacís Mera, Israel Villacís Mera.

TRAMITE

Mediante providencia del 9 de diciembre de 2021, este Despacho admitió la presente acción, disponiendo notificar y correr traslado a la entidad accionada, solicitándole además suministrar información acerca de los hechos indicados en el memorial de tutela y de las gestiones que sobre el caso se han tomado.

Dentro del término otorgado, María Elena Villacís Coral, en su calidad de Representante Legal de la entidad SERVISUR SAS, contestó la acción de tutela manifestando en primer lugar, que la baja visión con que cuenta el accionante, no es óbice para que sea tratado como una persona en condición de "discapacidad", ya que en el plan de salud ocupacional que se anexó al escrito de tutela, la recomendación de su médico tratante es continuar con las labores que venía desempeñando.

Asegura que el accionante ha presentado con esta, un total de cinco acciones de tutela que versan sobre los mismos hechos y las mismas pretensiones, abusando de su derecho a acceder a la protección de sus derechos a través de este mecanismo constitucional.

Afirma que si lo que el accionante pretende es impugnar la decisión de su padre, debe acceder a la justicia ordinaria, la cual es la competente para resolver sus inconformidades.

Itera que el derecho de petición presentado el 15 de noviembre de 2021 fue contestado el día 3 de diciembre del mismo año, razón por la cual debe declararse la carencia actual de objeto debido a que la inconformidad con la respuesta no puede entenderse como ausencia de la misma.

Finalmente, considera que la entidad accionada no puede resolver de fondo las pretensiones presentadas por el accionante en su derecho de petición y a su vez en este escrito de tutela, ya que se tratan de pretensiones de orden sucesoral que deben resolverse por la jurisdicción ordinaria, citando a todos los herederos del causante, incluso a los indeterminados.

CONSIDERACIONES

1.- Competencia.

Este Despacho Judicial es el competente para conocer y fallar la presente acción de tutela, por el lugar de ocurrencia de los hechos, de acuerdo a las previsiones de los Decretos 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000.

2.- Problema jurídico.

El caso bajo estudio gira en torno a determinar si SERVISUR SAS, ha conculcado el derecho fundamental de petición del señor Fabián Ricardo Villacis Recalde, por la no contestación oportuna del derecho de petición presentado el 15 de noviembre de 2021.

3.- La Acción de Tutela.

Sea lo primero recordar, que la Constitución Política de 1991, instituyó la acción de tutela consagrada en el artículo 86, como un mecanismo preferente, expedito y sumario, mediante el cual se protegen los derechos fundamentales de toda persona que los considere amenazados o vulnerados, por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos previstos en la ley.

Este instrumento jurídico ha sido confiado por la Constitución a los jueces, cuya justificación y propósito consiste en brindar la posibilidad de acudir sin mayores requerimientos de índole formal para obtener una oportuna resolución, a la protección directa e inmediata del Estado, a objeto de que en cada caso, consideradas las circunstancias específicas y a falta de otros medios, se haga justicia frente a situaciones de hecho que representen quebranto o amenaza de derechos fundamentales, logrando así que se cumpla uno de los fines esenciales del Estado, consistente en garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política.

4.- Derecho Fundamental de Petición.

El derecho de petición es una garantía que ha sido reconocida dentro de la propia Constitución Política en su artículo 23, al preceptuar que toda persona puede formular peticiones ante las autoridades, dirigidas a obtener una pronta resolución de la

cuestión sometida a su conocimiento, por lo que dada esa connotación de fundamentalidad de la que se reviste, la Corte Constitucional ha abordado su análisis en diversos pronunciamientos jurisprudenciales a partir de los cuales, ha delimitado una serie de características que deben ser observadas en aras a no conculcar la mentada garantía constitucional.

Así las cosas, el Alto Tribunal Constitucional ha delimitado como características las siguientes:¹

“(…) (i) Es un derecho fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa y a través de él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

(ii) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de lo solicitado.

(iii) Los requisitos que debe cumplir la respuesta son los siguientes: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario.

(iv) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

(v) Es un derecho dirigido en principio, a las entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Sin embargo, la Constitución también señaló que es extensivo a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

(…)

En definitiva, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el sentido y alcance del derecho de petición sostenido que es un derecho fundamental y que mediante él se garantizan otros mecanismos constitucionales como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. Así mismo, ha sostenido que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de lo petitionado y, en esa medida, la respuesta debe ser oportuna, de fondo, clara, precisa y congruente con lo solicitado. (…)²”

Cabe precisar además, que este derecho fundamental fue reglamentado con la expedición de la Ley 1755 de 2015 “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” como marco legal que fija los parámetros para su observancia en cuanto a forma, decisión y términos de resolución.

5.- Requisito de subsidiariedad en la acción de tutela

La acción de tutela fue concebida en la Constitución Política, como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que existiendo se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable tal como lo prevé el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991.

Así las cosas, se tiene que para la procedencia de la tutela y debido al carácter residual de ella solo procede para evitar que se cause un agravio mayor al accionante mientras está a la espera de una decisión judicial de carácter ordinario así lo dijo la Corte Constitucional:

¹ Sentencia T-377 de 2000. Reiterado en la sentencia T-086 de 2015.

² Sentencia T-086 de 2015.

“En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan a su conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual de la acción. En este sentido, el carácter supletorio del mecanismo de tutela conduce a que solo tenga lugar cuando dentro de los diversos medios que pueda tener el actor no existe alguno que sea idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue vulnerado o amenazado. Esta consideración se morigera con la opción de que a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el peticionario puede acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De no hacerse así, esto es, actuando en desconocimiento del principio de subsidiariedad se procedería en contravía de la articulación del sistema jurídico, ya que la protección de los derechos fundamentales está en cabeza en primer lugar del juez ordinario”³

Entonces, si el medio de defensa judicial es inexistente o ineficaz para la protección de los derechos fundamentales, la acción de tutela se torna procedente, y el juez de tutela deberá entrar a revisar el caso de forma minuciosa para establecer la vulneración del derecho y adoptar las medidas necesarias para la protección del derecho mientras la jurisdicción ordinaria resuelve de fondo la situación.

6.- Configuración del perjuicio irremediable

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el juez constitucional debe examinar si se configuran las características del perjuicio irremediable establecidas en los reiterados pronunciamientos de esta corporación, a fin de determinar:

“(…) **que el perjuicio sea inminente**, lo que implica que amenace o esté por suceder (ii) **que se requiera de medidas urgentes para conjurarlo**, que implican la precisión y urgencia de las acciones en respuesta a la inminencia del perjuicio, (iii) **que se trate de un perjuicio grave**, que se determina por la importancia que el Estado concede a los diferentes bienes jurídicos bajo su protección, y (iv) **que solo pueda ser evitado a través de acciones impostergables**, lo que implica que se requiere una acción ante la inminencia de la vulneración, no cuando se haya producido un desenlace con efectos antijurídicos; por lo que no puede pretenderse entonces, vaciar de competencia la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa en busca de obtener un pronunciamiento más ágil y expedito sobre los procedimientos ordinarios. ⁴ (Negritas por fuera del texto original)

Es así que la acción de tutela tiene naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo es procedente cuando no existan otras vías judiciales, adecuadas e idóneas para la protección del derecho fundamental, o cuando de existir una vía ordinaria es imprescindible la intervención del juez de tutela para evitar un perjuicio iusfundamental irremediable. La razón de ser de estas reglas radica en que todos los procesos judiciales deben concebirse como medios para lograr la eficacia de los derechos fundamentales y, en consecuencia, el amparo solo procede cuando el diseño de éstos no tiene la capacidad para cumplir con ese propósito en las circunstancias del caso concreto.

7. El caso concreto.

Descendiendo al caso sub examine, es importante aclarar que efectivamente el accionante presentó con anterioridad, una acción de tutela para proteger su derecho de petición presuntamente vulnerado, la cual correspondió en reparto a este Despacho, bajo el radicado 2021-00543.

Sin embargo, los hechos y pretensiones de los escritos de tutela no son idénticos, pues se trata de diferentes derechos de petición radicados en distintos días, así mismo, a pesar de que se hace relación a algunos hechos similares, la petición en concreta también es

³ Corte Constitucional Sentencia T-030 de 2015 Magistrada Ponente Dra. Martha victoria Sáchica Méndez

⁴ Ver sentencias T-1008 de 2012, T-373 de 2015. T-571 de 2015 y T-630 de 2015

diferente. Por lo tanto, es del caso estudiar de fondo la solicitud de amparo presentada en esta oportunidad.

Igualmente, el Despacho no desconoce la situación en la que se encuentra el señor Fabián Ricardo Villacís Recalde debido a su condición de baja visión, que se soporta con el certificado de recomendaciones médico laborales anexo a la presente acción de tutela.

Pues bien, se constata en el expediente, que el accionante formuló petición el día 15 de noviembre de 2021 ante SERVISUR SAS, para solicitar se adelanten los trámites necesarios a fin de que se redistribuyan las acciones heredadas del causante Gerardo Alonso Villacís Coral, en favor de sus 7 hijos legalmente reconocidos: Lucía y Martha Villacís Melo, Germán Eduardo Villacís Oviedo, Diego Germán Villacís Mafla, Fabián Ricardo Villacís Recalde, Raquel Villacís Mera, Israel Villacís Mera.

Adicionalmente, el accionante anexó la contestación remitida por la entidad accionada SERVISUR SAS, a la dirección dispuesta para tal fin. Por lo tanto, se tiene que la petición elevada por el accionante fue resuelta el día 3 de diciembre de 2021.

En este punto es importante traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional.

“El derecho de petición puede ser interpuesto ante particulares y autoridades públicas, la importancia respecto de éstas últimas radica en que a través de éste, se coloca a la administración en funcionamiento, se exige el goce de distintas prerrogativas y se accede a la información, es por esta razón, que dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que, la respuesta debe entregarse dentro del término legalmente establecido para ello y, (ii) la contestación debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que, permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado. Sobre el tema existe abundante jurisprudencia, en la que esta Corte ha definido los conceptos básicos y mínimos que componen este derecho, así como su núcleo esencial; sobre éste último aspecto ha manifestado que el mismo radica en la resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la solución tenga que ser positiva.”⁵ (Subrayado fuera del texto original)

En este orden de ideas, es relevante precisar que no basta con que el accionante afirme que su derecho fundamental de petición ha sido conculcado, en tanto es necesario respaldar dicha afirmación con elementos que permitan comprobar lo dicho, pues el Despacho evidencia que la petición presentada fue debidamente contestada, incluso antes de la interposición de la presente acción de tutela y en la misma se responde cada una de las peticiones elevadas y se establecen las razones por las cuales la respuesta a su petición no es necesariamente positiva.

Además, los temas del asunto que ahora son materia de examen, son propios de la Jurisdicción Ordinaria, pues encarnan una discusión de tipo jurídico de reclamación de derechos, y, siendo la acción de tutela un mecanismo excepcional de carácter residual y subsidiario, no lo autoriza para reemplazar los medios ordinarios existentes para dirimir controversias fijadas a la jurisdicción referenciada.

Claramente se observa que en este asunto existe un debate que involucra temas de carácter sucesoral, mismo que no se ha decantado entablando las acciones judiciales correspondientes, para que ahora por esta vía constitucional trate de resolverlos dejando de lado a la jurisdicción competente.

Adicionalmente, de la revisión de los hechos expuestos por la parte actora y en observancia a las pretensiones incoadas con el libelo, no se puede establecer que en el momento subsista la urgencia de la intervención del juez constitucional, pues no se demuestra que la amenaza a algún derecho va a suceder inminentemente, en

⁵ Cita del texto original Sentencia T-487 de 2017.

cuanto, de lo narrado en los fundamentos de hecho, no se puede establecer que exista una afectación inminente a los derechos fundamentales del accionante.

Por lo tanto, el Despacho concluye que la respuesta emitida por SERVISUR SAS, resulta suficiente, congruente y efectiva, toda vez que satisface plenamente los requerimientos de quien la solicita y frente a ella ya existe respuesta, como se dijo, previa a la interposición de la acción constitucional, es decir, concluye el Despacho es una acción improcedente.

Se recuerda que, al respecto la Corte Constitucional, ha dicho que “el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa”⁶

En ese orden de ideas se deberá negar el amparo deprecado, en tanto no existe en el plenario prueba alguna de la vulneración del derecho de petición, pues como se dijo en precedencia, la respuesta se realizó de forma efectiva, congruente y completa antes de la presentación de la acción de tutela.

DECISIÓN.

En razón y mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE IPIALES, Nariño, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO. – NEGAR el amparo de tutela deprecado por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO. - Comuníquese esta decisión a las partes por el medio más eficaz.

TERCERO: Si la decisión no fuere impugnada, remítase el expediente ante la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme a las reglas establecidas para la remisión electrónica.

Firmado Por:

Hilda Isabel Chamorro Morales
Juez Municipal
Juzgado Municipal
Civil 002
Ipiales - Nariño

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a54b5141b9e5d71bf78c9543f0cf9326093ff3c4f1651de73902a40ce2bd57ba

Documento generado en 14/01/2022 02:08:01 PM

⁶ Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2012.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>